

Una década de luchas estudiantiles

La movilización estudiantil del pasado 10 de noviembre conmovió al país. Sin embargo, pocos saben que no surgió por generación espontánea. Esa inmensa protesta que se lidera actualmente para reformar la Educación Superior condensa una década de luchas protagonizada por el sector educativo contra la crisis presupuestal, la autonomía universitaria, entre otros problemas. He aquí algunas de las protestas previas entabladas en las universidades regionales.

Por **Martha Cecilia García***

Un movimiento como el estudiantil que presenciamos hoy no surge por generación espontánea. Las movilizaciones estudiantiles recientes, como la del pasado 10 de noviembre, que tanto han sorprendido a algunos lúcidos “creadores de opinión”, condensan las luchas que por décadas han protagonizado escolares, universitarios, estudiantes de instituciones técnicas y tecnológicas y normalistas en el país.

La financiación de las universidades públicas, la autonomía, el bienestar universitario, la calidad académica, las libertades democráticas y la participación en asuntos que competen a la sociedad en su conjunto han sido los temas que han motivado la protesta estudiantil durante las últimas décadas

“**La financiación de las universidades públicas, la autonomía, el bienestar universitario, la calidad académica, las libertades democráticas y la participación en asuntos que competen a la sociedad en su conjunto han sido los temas que han motivado la protesta estudiantil durante las últimas décadas y hoy constituyen los puntos que contiene el Programa Mínimo de los Estudiantes**”.

y hoy constituyen los puntos que contiene el Programa Mínimo de los Estudiantes.

En este artículo nos referiremos tan solo a algunas de las luchas emprendidas por los jóvenes que lograron ingresar al sistema público universitario en el último decenio —sin



La gran marcha estudiantil de comienzos de noviembre pone de presente las reivindicaciones que desde hace más de 10 años vienen adelantando los estudiantes de todo el país por el derecho a la educación.

olvidar que los estudiantes han sido protagonistas importantes de la movilización social en el país desde comienzos del siglo XX— con el fin de evidenciar cómo la gran marcha estudiantil de comienzos de noviembre pone de presente las reivindicaciones que desde hace más de 10 años vienen adelantando los estudiantes de todo el país.

Luchas estudiantiles por la crisis presupuestal de las universidades públicas

Durante la década de los 90 y comienzos del 2000, se dictaron leyes que ordenaban la emisión de estampillas pro-universidades,

que deberían cobrarse obligatoriamente por la administración central y las entidades y establecimientos públicos descentralizados, con el fin de destinarse a la construcción y mantenimiento de plantas físicas, equipos, dotación de bibliotecas y laboratorios, fomento de investigaciones, entre otros. Son pocas las universidades públicas donde no se presentaron protestas para cuestionar el manejo que se le daba a los recursos provenientes del cobro de estas estampillas.

Lo que haya ocurrido con los recursos provenientes del cobro de estas estampillas debería ser asunto de indagación, porque lo que ponen en evidencia muchas de las protestas estudiantiles es que, o esos recursos son muy magros, o no se destinan a cubrir los



Las recetas para financiar las universidades públicas resultaron desastrosas para la mayoría de ellas y en el año 2003 la crisis presupuestal (que venía de tiempo atrás) explotó en varias instituciones educativas.

gastos que les fueron asignados. En cambio, los lineamientos básicos del plan educativo, formulados por el Departamento Nacional de Planeación para el último decenio del siglo, parecerían tener continuidad hoy y haber sido seguidos al pie de la letra. Entre esas directrices (contenidas en el Plan de Apertura Educativa 1991-1994), se contemplaba la reorientación del gasto público en educación, asignándole al estado mayor esfuerzo en la financiación de la educación primaria y secundaria y un mayor esfuerzo de las familias en la financiación de la educación superior¹.

Las recetas para financiar las universidades públicas resultaron desastrosas para la mayoría de ellas y en 2003 la crisis presupuestal (que venía de tiempo atrás) explotó:

la Universidad del Atlántico presentaba un déficit de \$30.677 millones de pesos, la del Cauca sólo tenía presupuesto hasta octubre porque arrastraba un déficit de 9.000 millones, la del Tolima tenía un déficit estructural de 100.000 millones de pesos y en 2003 registraba un déficit de 3.500 millones similar al que presentaba la Universidad Tecnológica de Pereira. Por su parte la Universidad del

Quindío tenía un déficit de 2.300 millones (El Tiempo.com, 2003).

En respuesta al déficit se llevaron a cabo las protestas de estudiantes, profesores, pensionados y personal administrativo de la Universidad del Atlántico (aglutinados en el Frente por la Defensa de la Universidad) entre 2002 y 2009, que también estuvieron motivadas por las diversas propuestas de autoridades locales, regionales y nacionales para solucionar la crisis presupuestal, entre

las cuales destacaron la del rector Juan Romero Mendoza,² en 2002, de cerrar la universidad, aduciendo que intentar arreglar la crisis lesionaría “intereses de estudiantes y de la sociedad civil”.

Así las cosas, la universidad se acogió a la Ley 550/99 para llevar a cabo

una reestructuración de pasivos, que implicó un plan de reducción de personal docente y un alza de matrículas, aprobada por el Consejo Superior desde 2004 y puesta en marcha en 2007, lo que desencadenó protestas estudiantiles hasta 2009 porque, según los manifestantes, el incremento llegaba a 10 veces lo que pagaban antes de su entrada en vigencia. Un año después, el Ministro de Hacienda, Al-

“ Durante la década de los 90 y comienzos del 2000, se dictaron leyes que ordenaban la emisión de estampillas pro-universidades, que deberían cobrarse obligatoriamente por la administración central y las entidades y establecimientos públicos descentralizados, con el fin de destinarse a la construcción y mantenimiento de plantas físicas, equipos, dotación de bibliotecas y laboratorios, fomento de investigaciones, entre otros ”.

berto Carrasquilla, afirmó que la universidad era inviable financieramente y propuso, de una parte, liquidarla, porque de cada 100 pesos que le ingresaban a la entidad educativa se gastaba 130 pesos y, de otra, demandar aquellas pensiones sospechosas de ser fraudulentas.

Por su parte, la protesta estudiantil por la crisis financiera en la Universidad del Tolima estalló en 2009, cuando aprovecharon la rendición pública de cuentas del gobernador para preguntarle cómo iba a pagar la deuda de más de 40 mil millones de pesos que tenía la gobernación con la universidad, porque el departamento no ponía un peso mientras el 50% de su presupuesto lo aportaban las matrículas y lo restante la nación. Los estudiantes preguntaron si ese ahorro no se estaría yendo a pago de burocracia y clientelismo. Un mes después se inició un paro estudiantil para presionar el pago de la deuda.

A su vez, la agudización de la crisis presupuestal que ha soportado durante años la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (que se evidenciaba en la disminución de recursos, recorte de prácticas, despido de trabajadores, entre otros) motivó movilizaciones de los estudiantes, profesores y trabajadores de sus cuatro seccionales (Tunja, Chiquinquirá, Duitama y Sogamoso). En 2008, marcharon hasta Bogotá, para denunciar que la institución tenía la misma financiación inercial de 1993, mientras había pasado de 20 programas de pregrado a 53 y de 10.000 estudiantes a 23.000. En ese momento, la UPTC enfrentaba un déficit de más de 14 mil millones de pesos, producto de un aumento en la cobertura estudiantil sin un sustento económico que la respaldara. Los estudiantes protestaron contra el alza de matrículas, exigieron un trato igual al dado por el gobierno nacional a otras universidades públicas, y el cumplimiento en el pago de los montos financieros que por ley le corresponden a la UPTC. Las protestas han continuado hasta el presente año por falta de planta docente completa y del personal administrativo y de servicios generales que requiere la institución.

Como si fuera poco, entre 2004 y 2005 los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca protestaron en demanda de aumento de \$33.000 millones en el presupuesto de la entidad. Denunciaron que la gobernación debía la Universidad \$3.000 millones desde el 96 y no aumentaba las transferencias sino

que por el contrario, en el 98 el presupuesto de la universidad había pasado de \$11.000 millones a \$8.000 y en 2003 a \$9.200 y que la Asamblea de Cundinamarca había aprobado pasar a \$9.300 en 2004 (El Tiempo, 2004). Los recortes de presupuesto significaron aumentar las matrículas, contratar menos docentes, tener menor intensidad horaria, entre otros. Además, se modificaron los estatutos de la universidad, afectando la investigación y liquidando su autonomía.

Autonomía universitaria

Una tradicional reivindicación del mundo universitario ha sido la autonomía que supone la facultad de autogobierno o auto determinación por parte de las universidades, que fue garantizada constitucionalmente como la potestad de darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos (Art 69 de la CN/91). No obstante la ley la proclama, la autonomía se pasa por alto en varias regiones del país, al punto de que su violación ha sido denunciada de manera vehemente en muchos casos. Por ejemplo, estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de Córdoba, dieron una larga lucha durante el último decenio para llamar la atención pública sobre las amenazas físicas e intelectuales que se cernían sobre ellos, por el control ejercido por paramilitares en la universidad desde mediados de los años 90. Con marchas del silencio, bloqueos a la Troncal del Caribe, presentación de pliegos petitorios, y tres paros estudiantiles durante 2008, la comunidad académica pidió retirar al rector, Claudio Sánchez, quien presumiblemente había recibido ayuda de los paramilitares de Salvatore Mancuso para hacerse con ese cargo. En esas protestas también se denunciaron malos manejos administrativos y una crisis financiera amparada por el rector, en detrimento de la dotación de la biblioteca, el acceso a salas de internet y la negociación de tarifa diferencial de transporte público, y más de dos decenas de asesinatos cometidos contra miembros de la universidad.

De manera similar, en la Universidad Industrial de Santander, los estudiantes emprendieron una serie de protestas desde el día siguiente a la publicación, en la versión electrónica de *Vanguardia Liberal* del 4 de mayo de 2009, de la grabación de una conversación sostenida el 4 de julio de 2004,

entre el rector, Jaime Alberto Camacho Pico, y un paramilitar de alias “Félix”, quien le pedía a la autoridad universitaria una lista de líderes estudiantiles que promovieran ideas de izquierda. Al comienzo, la Coordinadora Estudiantil Universitaria Jaime Acosta manifestó su temor de que la petición tuviera que ver con un Plan pistola en la Universidad, en contra de quienes habían liderado las protestas contra las reformas adelantadas por el rector de la UIS. Ante la salida a la luz pública de esa conversación, Camacho Pico dijo que había sido él mismo, con ayuda de personal de la Universidad y por recomendación de una “autoridad”, quien había grabado la conversación.

La universidad fue cerrada el 19 de mayo y reabierta el 4 de junio, para evitar la continuación de manifestaciones, “pupitrazos” y asambleas (lo que no fue posible) en las que la comunidad universitaria rechazaba la decisión del Consejo superior de reelegir a Camacho Pico para un segundo periodo. Estudiantes exigían respeto a la autonomía y la dignidad de la universidad. Reabierta la institución educativa, los estudiantes procedieron a enladrillar la entrada del edificio administrativo. Además se hicieron otra serie de protestas e incluso se llegó a entutelar 520 veces

a la UIS. A finales de agosto de 2009, continuaron las protestas por la permanencia de Camacho Pico en el cargo de rector, por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. Los estudiantes exigían su derecho a la educación y a la vida y rechazaron 44 amenazas proferidas contra profesores y estudiantes de la UIS. Además, manifestaron su cansancio por el silencio de

las directivas frente a los posibles nexos del rector con el paramilitarismo y la falta de celeridad en la investigación al respecto. El rector

continuará en su cargo hasta 2012.

En otro contexto, el estudiantado de la Universidad de Sucre también luchó en defensa de la autonomía universitaria en 2004 contra la imposición del rector, Rafael Peralta Castro, por parte del gobernador, Jorge Anaya, accionista mayoritario de la Corporación Educativa del Caribe, y quien tuvo al primero como subalterno cuando fue rector de este ente de carácter privado. Los estudiantes denunciaron, entonces, la poca o nula autonomía del Consejo Superior y la injerencia negativa del sector privado en la universidad pública. Peralta estuvo al frente de la rectoría de Unisucre hasta febrero de 2009, cuando la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer fun-

“ **No obstante la ley la proclama, la autonomía se pasa por alto en varias regiones del país, al punto de que su violación ha sido denunciada de manera vehemente en muchos casos** ”.



Los universitarios se han vinculado a múltiples luchas sociales de otros sectores y han expresado su solidaridad. En esas manifestaciones también han hecho evidentes sus vínculos con la sociedad en su conjunto.



En las protestas estudiantiles del último año en Colombia se destaca la participación de padres de familia en la lucha de sus hijos universitarios.

ciones públicas porque, en su condición de rector de esa institución educativa, incurrió en falta disciplinaria gravísima (violación del régimen de inhabilidades) al nombrar en enero de 2005, como jefe de la Oficina de Control Interno de la Universidad a la cuñada del presidente del Consejo Superior de la Universidad, Pablo Salcedo Causado, quien ocupaba dicho cargo en nombre y representación del gobernador de ese departamento.

Relaciones universidad-sociedad

Los universitarios, además, se han vinculado a múltiples luchas sociales de otros sectores en conflicto y han expresado con vehemencia su solidaridad con ellos. En esas manifestaciones también han hecho evidentes sus vínculos con la sociedad en su conjunto, por ejemplo, al defender los hospitales públicos, no solo por ser los lugares donde realizan prácticas los estudiantes del área de la salud, sino por lo que significa el cierre de estos establecimientos que atienden amplias poblaciones regionales. El derecho a la educación ha sido reivindicado de la mano del derecho a la salud y así, tal y como rechazaron el proyecto de ley que reformaba la ley 30, también rechazaron los decretos de emergencia social que pretendían dar facultades extraordinarias al presidente para reformar el sistema de salud.

Es el caso de los estudiantes de la UIS quienes en 2004 se manifestaron para exigir al gobierno nacional cumplir con las obliga-

“ El derecho a la educación ha sido reivindicado de la mano del derecho a la salud y así, tal y como rechazaron el proyecto de ley que reformaba la ley 30, también rechazaron los decretos de emergencia social que pretendían dar facultades extraordinarias al presidente para reformar el sistema de salud ”.

ciones contraídas con el Hospital Universitario Ramón González Valencia y, además, presentaron sus propuestas: reorganizar la red pública departamental de hospitales, exigir al gobierno nacional el pago del contrato de concurrencia, eliminar la intermediación de las ARS y propiciar la reforma de la ley 100. Por su parte, en 2011, los estudiantes de Medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira manifestaron públicamente su desacuerdo con las propuestas del gerente del Hospital Universitario San Jorge: pedir que por cada estudiante que haga prácticas en el hospital, la Universidad le transfiera 20% de la matrícula. Con esos recursos el gerente pensaba pintar la universidad y dotar la Unidad de Cuidados Intensivos y afirmó que si ninguna de las propuestas era aceptada por las directivas de medicina de la UTP, buscaría otras alternativas. El director del programa de medicina dijo que después de 30 años de tener un convenio con ese hospital, era la primera vez que se planteaban propuestas de esta índole, ya que la mayoría de estudiantes de la universidad son estratos 1 y 2 y pagan muy poco por sus matrículas.

En síntesis, si bien las luchas estudiantiles del último año condensan las reivindicaciones (de las que solo hemos dado unos poquísimos ejemplos) de la movilización estudiantil del último decenio, hay que resaltar asuntos novedosos tales como la combinación de las acciones institucionales y no-institucionales, la convergencia de estudiantes de instituciones públicas y privadas en torno al rechazo del proyecto de reforma a la ley de educación superior, la participación de padres de familia en la lucha de sus hijos universitarios y de otros que en el futuro tendrán que vérselas con la educación superior, así como la capacidad coyuntural de discutir entre diversas corrientes políticas sobre asuntos que competen a una amplia gama de estudiantes.

Además, todas las luchas enunciadas en este artículo demuestran cómo los problemas de la educación superior han sido manifestados por los estudiantes de diferentes regiones del país durante, al menos, una década. La marcha del pasado 10 de noviembre, así como todas las reacciones que ha suscitado, no es más que el resultado de las protestas que vienen de tiempo atrás.■

***Martha Cecilia García**
Investigadora del equipo
Movimientos sociales del CINEP/PPP